

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política económica y social

En el orden político, cabe decir que la nueva mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de coalición parece asegurar por el momento que éste va a poder llevar a término su calendario de reformas. Sin embargo, el sector minoritario de la coalición, el Partido de la Minoría Húngara ha anunciado que va a empezar a cobrar su factura. El objetivo principal de esta formación es el de aprobar el Estatuto de las Minorías, proyecto aparcado desde hace más de tres años, que con la nueva situación tiene alguna posibilidad de salir adelante, pero que corre el riesgo de provocar tensiones .

En cuanto a los partidos políticos, la vuelta a la realidad tras las elecciones presidenciales está provocando efectos, sobre todo entre los perdedores. El PSD ha visto agudizadas sus tensiones internas, centradas en quien va a asumir el liderazgo del Partido en una etapa que se cree que va a consolidar el mandato presidencial y ejecutivo de Traian Basescu y del PDL. La vieja guardia del PSD, con el Presidente Ion Iliescu y el ex primer ministro Adrian Nastase, se han mostrado muy críticos con la gestión del actual líder, Mircea Geoana, y han pedido abiertamente su relevo con ocasión del Congreso del Partido que debe celebrarse el próximo mes de marzo. Geoana, por su parte, está tratando de cerrar filas, para lo que se ha reunido varias veces con los dirigentes del Partido que le apoyan. Recientemente mantuvo una reunión en la estación invernal de Poiana Brasov a la que asistieron 39 líderes locales que acordaron apoyarle en su reelección. Tanto Iliescu como Nastase no han tardado en calificar estas reuniones de inapropiadas y antirreglamentarias. Otros líderes que han manifestado su propósito de concurrir a las elecciones son el ex ministro de Asuntos Exteriores, Cristian Diaconescu y el senador Miron Mitrea, quizá el que encabeza el sector más crítico contra Geoana.

Por lo que respecta al PDL, tiene también intención de celebrar su congreso durante la primera parte del 2010. En este caso, sin embargo, la victoria de Traian Basescu ha afianzado su liderazgo en el Partido. A pesar de ello, algunas voces críticas con su exagerado personalismo están comenzando a aflorar en el Partido, que podrían tener una cierta repercusión en el Congreso. Sin embargo, por el momento ninguna de ellas ha llegado a cuestionar el liderazgo de Basescu.

Dentro de la tercera fuerza más significativa, el PNL, los resultados electorales en la primera vuelta de las presidenciales, calificadas como el mejor resultado obtenido hasta el momento por los liberales, ha cimentado la figura de su presidente, Crin Antonescu, en el que se ha reconocido con unanimidad la mayor revelación política del año. Con ello, Antonescu ha conseguido renovar sin reservas su liderazgo en el PNL y ha acabado por arrinconar al antiguo presidente y ex primer ministro, Calin Tariceanu.

Por último, el Partido de la Minoría Húngara, UPM, que es el Partido que ha encabezado las aspiraciones de la población húngara de Rumanía durante los últimos 20 años, se encuentra en el momento de

consolidar su posición dirigente. El papel que pueda representar desde su posición dentro del gobierno es esencial, sobre todo tras comprobar que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de diciembre, una gran parte de sus votos fueron a parar al Presidente Basescu.

Sin embargo, si durante los últimos tres meses del 2009, la evolución de la situación política fue casi la única protagonista de los medios de comunicación y pareció ocupar la atención total de la población, hasta el punto de que algunos medios llegaron a comentar que daba toda la impresión de que en Rumanía no existía ni la crisis económica ni la recesión ni ningún otro problema que no fuera derivado de las vicisitudes de los Partidos. La llegada del 2010 ha dejado la política en un segundo plano, centrando la atención del país en la situación económica y sus consecuencias.

El mes de enero inauguró el nuevo año con la impresión general de que Rumanía había conseguido superar la crisis política de los últimos meses y logrado una estabilidad política que le iba a permitir afrontar los retos más urgentes y en especial, las consecuencias de la crisis económica que ciertamente se habían agudizado en los últimos meses. En este sentido, las declaraciones del Primer Ministro, Emil Boc, a principios del mes, fueron inequívocas. Este gobierno tenía ante sí una dura e ingrata tarea, la de llevar adelante las medidas de austeridad necesarias para afrontar la crisis económica.

El asunto más importante de la agenda político-económica ha sido la serie de reuniones con la Delegación del FMI y otras entidades financieras internacionales con la misión de evaluar la situación de Rumanía y decidir si se cumplían las condiciones para librar la tercera remesa del préstamo concedido a Rumanía en el 2009, por valor de 2.300 millones de euros. Dicha remesa debía haber sido entregada en el mes de octubre pasado, pero el FMI decidió aplazarla hasta haber comprobado que el país se encontraba en condiciones de cumplir su parte del trato, básicamente un presupuesto para el 2010 y una serie de medidas legislativas conteniendo reformas estructurales del Sector público.

En el curso de su visita a Rumanía, la Delegación del FMI declaró que Rumanía estaba cumpliendo las condiciones referidas, con lo que se acordó que en el mes de marzo será librada la tercera parte del préstamo. Por su parte, el Comisario europeo, Joaquín Almunia, reconoció públicamente que Rumanía estaba realizando los sacrificios necesarios para conseguir relanzar su economía pudiera comenzar a despegar ya durante este año. El representante de Rumanía en el FMI, Mihai Tanasescu señaló por su parte que el Estado tiene suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones sin necesidad de incrementar el gasto público más allá del 5,9 en el 2010, así como reducirlo progresivamente en los próximos ejercicio con el objetivo de la convergencia con el espacio euro. Tanasescu mencionó la reforma de la imposición de determinados sectores de la actividad económica, así como mejorar el procedimiento de recaudación, asuntos que están recogidos en el Proyecto de reforma fiscal.

El factor común, tanto del Presupuesto del Estado como de las medidas de reforma legislativa es el de la contención y reducción de las obligaciones del Estado y del Gasto público. En este sentido, tanto el Primer Ministro como el Ministro de Finanzas insistieron durante el debate parlamentario en la necesidad de

austeridad y de frenar el gasto de la Administración pública, lo que provocó enconados debates. El presupuesto resultó finalmente aprobado con las previsiones de un déficit no superior al 5,9%. En cuanto a las medidas estructurales, el gobierno anunció también sus prioridades, a saber: reforma de las pensiones públicas, reforma retributiva del sector público y reforma fiscal. Asimismo, presentó un calendario según el cual a primeros de febrero presentaría al Parlamento el Proyecto de reforma de las pensiones, en marzo la ley de retribuciones y en abril el Proyecto de reforma fiscal.

Junto a estas medidas legislativas, el Ministro de Finanzas, Sebastián Vladescu, anunció que el gobierno seguiría adelante con la amortización de puestos de trabajo del Sector público, que inicialmente se cifra en unos 100.000 puestos de trabajo, añadiendo que ello no iba a suponer despidos masivos, puesto que se amortizarían no cubriendo las plazas vacantes y aplicando la edad reglamentaria de jubilación en la Función Pública. Tradicionalmente, las plazas vacantes que no se cubrían se habían venido utilizando para remunerar privilegiadamente a altos cargos y a ciertos sectores de funcionarios.

De momento, las mayores repercusiones la están teniendo los dos proyectos que afectarán más directamente a los ingresos de una buena parte de la población, a saber las pensiones y el salario de los empleados públicos. Por lo que respecta a la primera, ya ha tropezado con dos importantes obstáculos. Por una parte, el PNL, en la oposición, ha anunciado haber pedido al Defensor del Pueblo que intervenga para frenar la aprobación del proyecto por considerar que la reforma que afecta al cálculo del módulo para establecer la cuantía de la pensión es inconstitucional.

Por otra, la Unión de Jueces de Rumanía, asociación profesional que agrupo al sector más evolucionado de la Magistratura, acaba de dirigir una carta abierta al Ministro de Justicia, pidiéndole que se retire el proyecto de Ley, por considerarlo inconstitucional. Los jueces creen que varios preceptos contravienen no sólo la Constitución de Rumanía, sino también la Convención Europea de Derechos Humanos y la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, señalaron que el Proyecto de Ley vulnera el principio de no retroactividad de las Leyes, el de la igualdad ante la Ley y el de no discriminación, así como que consagra privilegios especiales para determinados sectores de la Administración pública.

Por lo que respecta a la Ley de retribuciones del Sector Público, en un principio los sindicatos de empleados públicos habían aceptado las líneas generales, consistentes en la supresión de una buena parte de los complementos que, en algunos casos pueden superar incluso al sueldo base, aceptando también la cuantía mínima de éste, que el gobierno ha cifrado en 750 lei mensuales. Sin embargo, las mismas centrales han anunciado que no dudarán en recurrir a nuevas movilizaciones, como las que desencadenaron en el 2009 si las condiciones de vida de los empleados públicos continúan deteriorándose.